



Análisis de coyuntura

En la meseta

IPNUSAC

El 13 de agosto se completaron 22 semanas desde que se inició la epidemia de COVID-19 en Guatemala. Un día después, el 14, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei cumplió siete meses desde que se instaló. El primero de esos dos ciclos –las 22 semanas– terminó con indicios de que el contagio se está desacelerando; el segundo –los primeros siete meses de la administración del partido Vamos– cierra, en cambio, con nuevas señales de un prematuro agotamiento gubernamental, mientras la crisis institucional que enfrenta a poderes del Estado con la Corte de Constitucionalidad se encuentra en un peligroso estancamiento, donde el signo dominante es la polarización alimentada por señales de tensión social, especialmente en el campo.

¿Inició la desaceleración del contagio?

Desde finales de julio y coincidiendo con el anuncio de las medidas de ingreso gradual y presuntamente controlado a la “nueva normalidad”,¹ las cifras

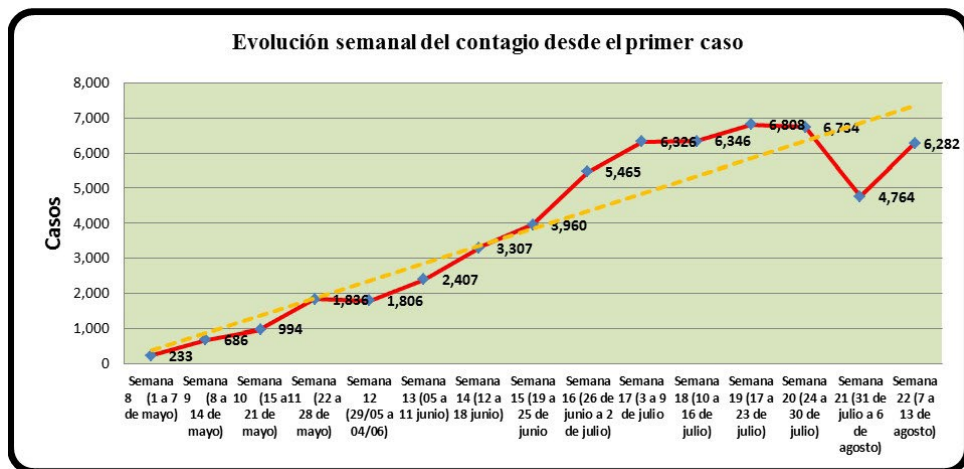
oficiales sobre el número de contagios empezaban a marcar una tendencia de menor número de casos nuevos de COVID-19. Aunque las cifras gubernamentales sobre la dimensión real de la epidemia en el país nunca han tenido total credibilidad, ni siquiera después de establecida la

1. Véase “En el laberinto de la crisis”, en Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición digital #189, pág. 10 y siguientes. Disponible en <http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/08/IPN-RD-189-1.pdf>

Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (COPRECOVID) bajo la dirección del epidemiólogo Edwin Asturias, lo cierto es que son las únicas disponibles y aun sabiendo que hay un subregistro, al menos ofrecen una idea aproximada de dónde estamos. Como puede

apreciarse en la gráfica 1, aunque lenta y erráticamente, la curva de contagios parece moverse en sentido descendente. O, como diría el propio Asturias, ha entrado en una “meseta” que alentaría la expectativa optimista de que “lo peor ya pasó”.

Gráfica 1

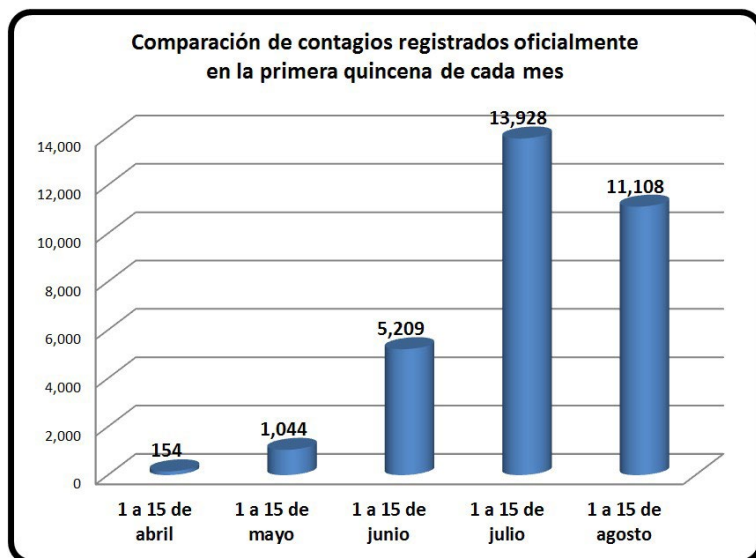


Fuente: elaboración propia con datos del MSPAS y Laboratorio de Datos GT

Si se da crédito a las estadísticas oficiales, y a las figuras que con ellas pueden formarse, podría admitirse que el “pico” del contagio se alcanzó en la semana 19 (del 17 al 23 de julio) y que en las tres semanas siguientes empieza a producirse el muy lento

descenso señalado. En la gráfica 2 puede apreciarse, en efecto, que durante la primera quincena de agosto hubo una notoria reducción de casos en comparación con igual período de julio, pero aún está lejos del comportamiento observado en junio.

Gráfica 2



Fuente: elaboración propia con datos del MSPAS y Laboratorio de Datos GT

Esta tendencia parece influida fuertemente por la reducción del número de casos en el área metropolitana de Guatemala, en contraste con la preocupación que despierta el aumento de casos en departamentos como Quetzaltenango, Escuintla e Izabal.

Signos de erosión gubernamental

Comportamiento del contagio que, por otra parte, no da sustento a las señales contradictorias del presidente Giammattei en el

sentido de que, por lo que a él respecta, la atención a la pandemia es ya un asunto del que deben responsabilizarse los habitantes del país. Así lo expresó en una reunión con alcaldes municipales el 6 de agosto, ante quienes dijo:

Una de las cosas es que hemos perdido el tiempo, no porque no queramos, sino porque nos hemos mantenido ocupados con el tiempo de coronavirus. Yo, gracias a Dios, ya voy saliendo de ese tema, para poder tomar el de gobernar el país. Ya le trasladamos la

responsabilidad a la gente, si se quieren cuidar se cuidan, si no, les sacamos tarjeta roja. Hoy sí ya es problema de la gente.²

Esta errática línea presidencial (recuérdese que hace 22 semanas se presentaba como el campeón de la lucha nacional contra la epidemia) le está pasando factura al gobierno, que en siete meses pasó de un alto respaldo ciudadano por el manejo de la crisis sanitaria a una caída de su credibilidad en esta materia. Así lo corrobora el más reciente estudio de opinión encargado por el diario *Prensa Libre* a la empresa ProDatos y cuyos resultados fueron publicados el 15 de agosto: la aprobación de los encuestados con la forma en que Giammattei maneja la situación del Coronavirus cayó de 83 % el 1 de abril a 46 % el 6 de agosto, en tanto que la desapro-

bación creció de 6 % a 36 % en el mismo período.³

La erosión gubernamental se hizo patente también en otros dos hechos. El primero fue una carta abierta, firmada por autoridades indígenas ancestrales de los pueblos maya, xinka y garífuna de Guatemala, dirigida a los titulares de los organismos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, a quienes declaran no gratos en los territorios indígenas y cuya “renuncia inmediata” exigen en el documento divulgado el 14 de agosto.⁴

El segundo hecho a que hacemos referencia es la manifestación realizada en la plaza central de ciudad de Guatemala, en la tarde del 15 de agosto, convocada por diversos colectivos urbanos para protestar por el manejo ineficiente

2. Véase el reporte de Erwin Escobar: Giammattei afirma que ahora el coronavirus en Guatemala “ya es problema de la gente”, en *Prensa Libre*, 6 de agosto de 2020. Accesible en <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/giammattei-afirma-que-ahora-el-coronavirus-en-guatemala-ya-es-problema-de-la-gente-breaking/>

3. “Cae aprobación del presidente Alejandro Giammattei por el manejo de la pandemia”, *Prensa Libre* 15 de agosto de 2020. Véase en <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cae-aprobacion-del-presidente-alejandro-giammattei-por-el-manejo-de-la-pandemia/>

4. El documento completo puede encontrarse en <https://www.facebook.com/Autoridad-indigenamayaxinkaygarifunagt/posts/2717498545200290>

y poco transparente, atribuido al gobierno de Giammattei, de los cuantiosos recursos financieros destinados a hacer frente a la crisis sanitaria y económico social derivada.

“¿Dónde está el dinero?” se lee en una fotografía aérea tomada a una pancarta gigante colocada en el piso de la plaza, pregunta que refleja el sentido principal del descontento ciudadano.

Tanto el documento de las autoridades indígenas ancestrales como la manifestación tienen el alto valor simbólico de la ruptura de significativos actores sociales con un gobierno al cual, al inicio de la gestión de Giammattei, habían otorgado tácitamente una tregua prolongada durante varios meses en virtud de las medidas de confinamiento para contener la epidemia.

El dique parece roto y, más allá de la capacidad actual de los convocantes para lograr mayor asistencia a las movilizaciones, el hecho es que el descontento social llegó a las calles y podría convertirse en factor de creciente ingobernabilidad.

Empate catastrófico

Esos signos de cansancio ciudadano añaden nuevos ingredientes a una crisis política e institucional agudizada en meses o semanas recientes. En conjunto constituyen la expresión actual de una crisis sistémica, estructural, más profunda. Se trata de una crisis multidimensional en la que se imbrican la crisis sanitaria plateada por la pandemia de COVID-19, los efectos económicos y sociales de las medidas tomadas para atender el desafío sanitario, la dislocación objetiva del modelo económico y social, de sus mecanismos de producción y reproducción, incluida la reproducción de los mecanismos de dominación material, ideológica y espiritual. Todo está siendo sacudido por la crisis.

Hay un encadenamiento entre las siguientes dimensiones o expresiones específicas de la crisis: lo sanitario, lo económico, lo social, lo político-jurídico (entendido este último como la condensación de los intereses de clases y fracciones de clase en contradicción-lucha perpetua). En ese encadenamiento (que no excluye otras expresiones conexas) el riesgo principal para el

Estado y la sociedad guatemaltecos es derivar hacia una catástrofe humanitaria cuyas manifestaciones más terribles serían la pérdida de millares de vidas a causa de la epidemia⁵ y otras afectaciones a la salud pública (desnutrición, incluida), la generalización del hambre, la desesperación social por la falta de acceso a los recursos para la vida habitual (aunque esta ya fuera de pobreza y miseria), la generalización de la inseguridad ciudadana y la acentuación de una suerte de “feudalismo municipal” ante el debilitamiento extendido de la presencia y la eficacia de la institucionalidad pública nacional.

Tal es el contexto en que tiene lugar el agravamiento de la crisis político-institucional, en la que puede apreciarse una relación directamente proporcional entre la profundización de esta dimensión específica de la crisis y la crisis

general del país. O dicho así: a mayor parálisis e ineficiencia de la estatalidad, mayor dramatismo en la ya difícil situación de las mayorías populares.

De ahí que encontrar una ruta de salida del laberinto político-institucional va más allá de la defensa abstracta de credos republicano-democráticos (aunque no los niega) y se sitúa en el plano de una necesidad vital para ese ente diverso llamado Guatemala. La viabilidad de una comunidad estatal anclada en el propósito constitucional del bien común, así como van las cosas, está puesta en entredicho.

El país vive un “empate catastrófico”,⁶ que aplica no solamente a la correlación parlamentaria de fuerzas, sino también al conjunto de la condición estratégica nacional: el modelo

5. Desde el inicio de la pandemia ha sido frecuente leer globalmente expresiones neomaltusianas que juegan con la estadística de las defunciones y las comparan con los decesos causados por otras enfermedades, minimizando el impacto estadístico del mal, pero bastaría con ver cuáles son las franjas sociales y profesionales en los cuales se están produciendo las “bajas”, para imaginar los efectos sociopolíticos e institucionales, sin contar con la incubación de expresiones ideológicas que se prolongarán por décadas. ¿Cuántas personas, familiares, amigos o conocidas, “perdieron la batalla”, cuántas más se contagiaron y cuáles son las secuelas en sus proyectos de vida?

6. Se toma aquí en préstamo este concepto, utilizado por una prestigiosa personalidad académica y política nacional en algunos espacios de análisis, pero cuyo nombre se omite por carecer de autorización expresa de ella para ser citada públicamente.

económico-social neoexportador y depredador agotó sus posibilidades, ya es a ojos vista inviable, pero al mismo tiempo está lejos de articularse un proyecto nacional-popular alternativo; apelando a conceptos hoy en desuso, los de arriba ya no pueden gobernar como antes, pero los de abajo no se han organizado ni unido para derribar el antiguo régimen, ni tienen un proyecto claro compartido, alternativo.

En su diversidad contradictoria, el bloque dominante lucha por recomponerse, estabilizar su modelo de dominación, restaurar las prácticas de hacer negocios y usar el Estado como fuente de acumulación, preservar un estado de cosas económico-sociales con altas tasas de explotación del trabajo ajeno y depredación del ambiente (mantener un esquema atractivo de “tasas de retorno”, en su lenguaje).

Como se sabe, el Estado capturado fue sacudido en profundidad en sus mecanismos de gestión política a partir de abril de 2015 y eso precipitó un proceso, más

aspiracional que real, para la reforma estatal. El *status quo* logró detener los ímpetus reformistas, regeneradores, supo jugar sus múltiples cartas electorales y posibilitar su proceso de rearticulación, en medio de un panorama de notorias fracturas internas, de vacilaciones y defecciones en los poderes tradicionales (especialmente los económicos).

La fase de la crisis en que nos encontramos, precisamente, es una en que se busca llevar a término y consolidar la restauración. En el proyecto restaurador se coaligan remanentes de la contrainsurgencia-redes político-económicas ilícitas (metamorfosis de antiguos aparatos ilegales clandestinos de seguridad, CIACS), el poder oligopólico tradicional y oligopólico emergente, así como integrantes del crimen transnacional (básicamente la narcoactividad).

A través de un perverso proceso de judicialización de la política y politización de la justicia, los promotores de la restauración han tenido éxitos en la línea de

“extirpar” o quitar del camino a quienes promovían la reforma del Estado, especialmente en el ámbito de la independencia y la probidad judicial, aquellas instituciones que amenazaban las bases históricas del estado de cosas que entró en crisis: la impunidad y la corrupción.

Al momento se proponen culminar esos éxitos, sin importar que en sus afanes arrastren la legitimidad y la legalidad de la institucionalidad llamada a respetar el pacto constitucional.⁷ Pero al hacerlo están llevando, precisamente, a la ruptura del orden constitucional, con todas las implicaciones que eso tiene en cuanto a las posibilidades de hacer frente a la crisis multidimensional que aqueja al país: por ese camino se profundiza el empate catastrófico ya apuntado.

El confinamiento y las prohibiciones derivadas del estado de calamidad pública han reforzado, en los protagonistas del proyecto restaurador, la sensación de

impunidad; los varios ejemplos de lo logrado durante el gobierno de Jimmy Morales parecen alentarlos a tensar la situación hasta extremos límite, tanteando, paso a paso, hasta dónde puede estirarse el cordel sin que se rompa, o acaso corriéndose el riesgo de la ruptura parcial, dado que –en su percepción– no hay poder humano o divino, interno o externo, que los pueda detener. A su modo, tienen conciencia del empate, pero están convencidos de que pueden superarlo, de una u otra forma.

El factor jurídico-legal (la Corte de Constitucionalidad) y los mecanismos constitucionales de contrapeso (Procuraduría de los Derechos Humanos) pasan por su momento de mayor debilidad, con poco respaldo social sustantivo (por más que el activismo digital y mediático de actores de la sociedad civil sea importante). La desmovilización social –por agotamiento desde finales de 2018 y como efecto del confinamiento desde marzo de 2020– es

7. En sentido estricto, en la historia republicana de Guatemala la legalidad ha sido muchas veces un mero ornamento, y en casos extremos los poderes dominantes no se han sonrojado cuando violentan todas las formas, a esos fines han servido prácticas como las desapariciones forzadas, las ejecuciones de connotados líderes sociales y políticos, los amañes y robos de procesos electorales, etc.

uno de los factores que alientan la temeridad del bloque restaurador.

A eso se suma la retracción de la comunidad internacional, ocupada básicamente en el desafío de la pandemia y el reacomodo global de los superpoderes en la geopolítica de la post COVID-19. De manera específica, la evolución de la lucha electoral en EE. UU. y el dislocamiento de la política bipartidista hacia el norte de Centroamérica, crean espacios vacíos

en los que el liderazgo restaurador ha aprendido a moverse.

En tales condiciones, los márgenes de maniobra y posibilidades de incidencia para los actores progresistas, democráticos y defensores de la institucionalidad son limitados. La pregunta es ¿qué tan limitados son? ¿Es posible hacer algo, o habrá que conformarse con reuniones virtuales para lamerse las heridas?